

ITE-CG 08/2020

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

EXPEDIENTE: CQD/Q/CG/002/2019

DENUNCIANTE: ITE (OFICIOSO)

DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CQD/Q/CG/002/2019.

ANTECEDENTES

- I. Escrito inicial. Mediante oficios DPAyF-424/2019 e ITE-DPAyF-426/2019, de fechas doce y quince de julio¹, respectivamente, la C.P. Janeth Miriam Romano Torres, Directora de Prerrogativas, Administración y Fiscalización (DPPAyF) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), remitió al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del ITE, copia simple de los diversos ITE-PCG-218/2018 e ITE-PCG-245/2019, y anexos respectivos, relativos a las vistas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en las resoluciones INE/CG54/2019, INE/CG55/2019, INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG59/2019, INE/CG57/2019, INE/CG59/2019, INE/CG51/2019 e INE/CG63/2019, referentes a las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio 2017.
- **II. Turno.** Con fecha quince de julio el Titular de la **UTCE**, dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias **(CQyD)** del **ITE**, con los oficios ITE-DPAyF-424/2019 e ITE-DPAyF-426/2019, y anexos descritos, para los efectos legales correspondientes.
- III. Radicación del cuaderno de antecedentes. El dieciséis de julio, los integrantes de la CQyD, radicaron el cuaderno de antecedentes CQD/CA/CG/001/2019, con el fin de allegarse de los elementos necesarios para establecer si existían indicios suficientes que hicieran presumir la probable transgresión a la normativa electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consistente en la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, y de ser así, aperturar el procedimiento sancionador atinente. Para tal efecto, se requirió a la Titular de la DPPAyF del ITE, así como al Secretario del Consejo General del INE, la documentación que se dejó precisada en el referido acuerdo.
- IV. Integración de la Comisión. Toda vez que el periodo de vigencia de la CQyD, aprobado mediante acuerdo ITE-CG 76/2017, concluyó el once de octubre, resultó necesario designar

¹ Salvo mención expresa, los actos y hechos que se mencionan en la presente resolución, deben entenderse acontecidos en el año **dos mil diecinueve**.

a la Consejera y Consejeros que la integrarían por un periodo similar de dos años, razón por la cual mediante Acuerdo ITE-CG 33/2019, el Consejo General **(CG)** del **ITE** aprobó la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias para los fines y atribuciones del Instituto, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente: Consejero Electoral Juan Carlos Minor Márquez.
Vocales: 1) Consejera Electoral Denisse Hernández Blas.
2) Consejero Electoral Edgar Alfonso Aldave Aguilar.

V. Recepción de documentos. Por acuerdo de veinticinco de octubre la CQyD, tuvo por presente a la C. P. Janeth Miriam Romano Torres, Titular de la DPPAyF, con el oficio ITE-DPAyF-530-2019 y anexo, informando que según los datos obtenidos del Programa de Seguimiento a Sanciones y Remanentes del INE, las resoluciones identificadas con las claves INE/CG54/2019, INE/CG55/2019, INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG59/2019, INE/CG61/2019 e INE/CG63/2019, referentes a las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio 2017, se encontraban firmes. De igual forma, con el oficio INE-UTVOPL/3375/2019, se tuvo por presente al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales del INE, remitiendo el diverso INE/UTF/DA/10370/19, signado por el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a través del cual envió un CD óptico certificado de la documentación que se localizó en los archivos del Sistema Integral de Fiscalización, el cual contiene por lo que respecta al presente asunto, la carpeta electrónica: 2_PRI_TLX, y esta a su vez, las diversas:

- a) Carpeta "Oficios 1era y 2da vuelta";
- b) Carpeta "Respuestas 1era y 2da vuelta";
- c) Carpeta "Dictamen"; y
- d) Su correspondiente archivo en formato Excel, denominado "Balanza catálogos 2017".

En consecuencia, se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado mediante acuerdo de fecha dieciséis de julio.

Finalmente, una vez concluidas las diligencias de investigación ordenadas y dado que de las constancias antes descritas, se desprendió la existencia de indicios suficientes que hicieron presumir la probable transgresión a la normativa electoral, por parte del **PRI**, consistente en "la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política", se estimó procedente aperturar de oficio el procedimiento sancionador atinente.

VI. Inicio del procedimiento y emplazamiento. Mediante proveído de fecha treinta de octubre, la CQyD dio inició al procedimiento ordinario sancionador en que se actúa, asignándole la nomenclatura CQD/Q/CG/002/2019, y ordenando emplazar al denunciado PRI, por conducto de sus respectivos representantes ante el CG, corriéndole traslado con copia certificada de todas y cada una de las constancias y anexos que integraban el expediente, para hacer de conocimiento los hechos que le fueron imputados, concediéndole un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del acuerdo para que diera respuesta y ofreciera pruebas en relación a las imputaciones formuladas.

VII. Contestación, pruebas y término para alegatos. A través de proveído de siete de enero de dos mil veinte, se tuvo por presente al denunciado PRI, dando contestación a los hechos que le fueron imputados en el presente asunto, así como ofreciendo pruebas en los términos precisados en su escrito de cuenta, mismas que se tuvo por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, al no existir diligencias pendientes por practicar se ordenó poner los autos a la vista del denunciado, para que dentro del término de cinco días hábiles manifestara por escrito en vía de alegatos, lo que a su derecho conviniera.

VIII. Cierre de instrucción. Una vez sustanciado debidamente el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, se tuvo por presente al **PRI** formulando alegatos en el presente asunto, se declaró cerrada la instrucción y se instruyó al titular de la **UTCE**, procediera a formular el proyecto de resolución correspondiente, para ser sometido al conocimiento y aprobación de la **CQyD**.

IX. Ampliación de término de resolución. Vista la carga de trabajo y la carencia de personal adscrito a la UTCE, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la CQyD determinó ampliar por diez días, el término para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente a los procedimientos sancionadores CQD/Q/CG/001/2019, CQD/Q/CG/002/2019, CQD/Q/CG/003/2019, CQD/Q/CG/004/2019, CQD/Q/CG/005/2019, CQD/Q/CG/006/2019 y CQD/Q/CG/007/2019.

X. Sesión de la CQyD. En Sesión Extraordinaria, celebrada el catorce de febrero de dos mil veinte, la **CQyD** analizó, discutió y aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes, el proyecto de resolución propuesto en el presente asunto.

XI. Remisión del proyecto de resolución. A través de oficio ITE-CQyD/JCMM/05/2020, de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Presidente de la CQyD remitió el proyecto de resolución a la Consejera Presidenta del ITE, a fin de que lo sometiera a la consideración del pleno del CG.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 116, fracción IV, incisos b), c) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos², en relación con los artículos 98, párrafos 1 y 2, y 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 95 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala³; 5, 19, 20, 21 y 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala⁴, el ejercicio de la función electoral del Estado se encomienda al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, organismo público autónomo y autoridad competente en la materia.

En este sentido, el **CG** del **ITE**, es competente para conocer y resolver sobre el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 41 base V apartado C de la Constitución; 95 de la Constitución Local; 1, 2, 19, 20, 25, 51 fracciones I, II, III, XIX, LI, 345 fracción I, 346 fracciones I, XIV, y XVII, 366, 372 al 381 de

3

² En lo sucesivo Constitución.

³ En lo subsecuente Constitución Local.

⁴ En lo sucesivo LIPEET.

la LIPEET; 52, fracción X, y 87 aparatado C, fracción I, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala⁵; 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 al 21, 41 al 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; y, 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Toda vez que el origen del presente procedimiento **oficioso** fue la **vista ordenada** por el **INE** en la resolución **INE/CG55/2019**, siendo atribución del **CG** vigilar el cumplimiento de todo lo relativo a las prerrogativas, derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos, y por tanto, ser el encargado de imponer las sanciones derivadas de su inobservancia.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.

- 1. Precisión de los hechos y conducta denunciada. Del análisis realizado a la resolución INE/CG55/2019, así como del contenido de la carpeta 2_PRI_TLX, misma que contiene la documentación relacionada con la conclusión 2-C13-TL, se desprende lo siguiente:
 - a) La conducta denunciada deriva de lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la LPPET, el cual señala que es obligación de los partidos políticos editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.
 - b) Al respecto, el INE señaló tanto en el dictamen consolidado como en la resolución INE/CG55/2019, con la cual se dio vista a la CQyD, lo siguiente:
 - **"g)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión **2- C13-TL** lo siguiente:

Tareas Editoriales

De la verificación a la cuenta "Tareas editoriales", se observó que el sujeto obligado no cumplió con la obligación de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/44773/18 notificado el 19 de octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número PRI-TLAX/SFA/57/2018 de fecha 5 de noviembre de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

"De la observación número 21 se informa que al no llevarse a cabo el Programa Anual de trabajo, se procede a realizar los cambios respectivos a las pólizas generadas como pasivo en la contabilidad."

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, ya que de las aclaraciones señaladas se constató que las Tareas editoriales son una obligación del

-

⁵ En lo sucesivo LPPET.

partido ya que de conformidad a la normativa debe cumplir por lo menos con una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.

Se le solicita presentar nuevamente en el SIF, lo siguiente:

Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso h) de la LGPP, en relación con el artículo185, numeral 1, inciso a) y 296 del RF. El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA/47089/18 de fecha 27 de noviembre de 2018.

Con escrito de respuesta número PRI-TLAX/SFA/61/2018 de fecha 04 de diciembre de 2018 el instituto político manifestó lo que a la letra se transcribe.

"De la observación número 17 se informa que al no llevarse a cabo el Programa Anual de trabajo, se procede a realizar los cambios respectivos a las pólizas generadas como pasivo en la contabilidad."

Por lo anterior este Consejo General considera que ha lugar a dar vista al **Instituto Tlaxcalteca de Elecciones** para que, en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente en relación a no editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación correspondiente al ejercicio 2017 por el instituto político."

2. Excepciones y defensas. Ahora bien, el partido político denunciado, al dar contestación al emplazamiento así como en la etapa de alegatos en el presente procedimiento, refirió lo siguiente:

"En relación a la supuesta transgresión a la normativa electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional, consistente en la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico y de formación política, es importante señalar que, en este instituto político no se pudieron realizar dichas publicaciones, toda vez, que de las prerrogativas económicas que llegan a este partido, no se cuenta con la capacidad económica para llevarlas a cabo, sin querer transgredir la normatividad que nos aplica, puesto que como Ustedes lo pueden apreciar en los dictámenes consolidados de los ejercicios anuales que ha aprobado el Instituto Nacional Electoral, en relación al ejercicio del recurso público que tenemos, y que obran en el presente expediente, hemos sido sujetos de diversas multas que nos imposibilitan poder llevar a cabo la edición y distribución de las publicaciones anteriormente señaladas, ya que el recurso público que nos ministran al partido únicamente alcanza para pagar sueldos y salarios del personal que labora en este Instituto, así como para pagar los servicios públicos básicos para la subsistencia del partido, tales como luz, agua y teléfono, señalar que no se ha realizado ningún desvío de recursos y sólo se ha administrado en el sentido de poder realizar actividades muy básicas de nuestro instituto político.

Por lo que es necesario dejar precisado que estamos **imposibilitados materialmente** y **no contamos con la capacidad de dar cumplimiento** en editar y distribuir una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política."

3. Fijación de la Litis.

Por lo expuesto, en el presente asunto se debe dilucidar si el **PRI**, incurrió en una transgresión a la normativa electoral local, derivada de *"la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política"*.

4. Marco normativo.

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente el marco jurídico que regula la obligación de los partidos políticos respecto de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política durante el ejercicio de un año calendario. En este sentido, tenemos que:

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala

Artículo 346. Constituyen infracciones de los partidos políticos y coaliciones:

I. El **incumplimiento de las obligaciones** establecidas en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala

Artículo 52. Son obligaciones de los partidos políticos:

X. Editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política;

Artículo 87. Los partidos políticos tendrán derecho al **financiamiento público** para sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las **disposiciones siguientes**:

C. Por actividades específicas como entidades de interés público:

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las **tareas editoriales** de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el apartado A de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del apartado antes citado.

Como se advierte, la legislación aplicable al presente caso establece como obligación de los partidos políticos el editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, con el objeto de que dichos institutos políticos cumplan con su finalidad de **coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática**, así como para tener una cultura política mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las **publicaciones** mencionadas, sino también determinó dotarlas de **financiamiento público**.

Ahora, si bien es cierto que la ley electoral local no establece puntualmente los requisitos que deben cubrir las **publicaciones** en comento, del contenido del artículo 52, fracción X, de la LPPET, así como de la doctrina jurisdiccional aportada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación **(Sala Superior)**, es posible obtener algunas características que estas deben cubrir, para tener por cumplida la exigencia legal prevista.

A. En primer término podemos advertir que se trata de una obligación doble:

- a) Editar y distribuir una publicación trimestral de divulgación, y
- b) Editar y distribuir una publicación semestral de carácter teórico y de formación política.

Es decir, la exigencia en la realización de estas actividades, especificadas en forma diversa por su contenido y periodicidad, deja advertir que se trata necesariamente de **dos publicaciones distintas**, sin posibilidad alguna de conjuntarlas en una sola, pues carecería de razón el que el legislador hubiera precisado la naturaleza y periodicidad de las referidas publicaciones en los términos en que lo hizo.

De esta forma tenemos, que los partidos tienen la obligación de editar, por cuanto hace a las publicaciones de **divulgación**, por lo menos **cuatro** números durante un año calendario, y respecto de las publicaciones de **carácter teórico** y de **formación política dos**.

En esa lógica, para acreditar el cumplimiento de dicha disposición, los partidos deben proporcionar a la autoridad fiscalizadora, ejemplares de los cuatro números de la publicación de divulgación, y dos de la de carácter teórico, publicados y difundidos en el transcurso del año que corresponda.⁶

B. El carácter de las publicaciones será de divulgación, teórico y de formación política.

Ahora bien, con el propósito de esclarecer qué debe entenderse por publicaciones de divulgación y de carácter teórico, las cuales se encuentran obligados a editar y distribuir los partidos políticos, es necesario precisar que la Sala Superior, ha establecido el contenido y alcances que deben revestir este tipo de ediciones, a saber:

- a) Una publicación de divulgación, es aquella que con independencia de contener breves notas de información, externa la postura del Partido Político respecto de diversos temas de índole político-social.⁷
- b) Por su parte, una publicación que merezca ser calificada de carácter teórica, debe tener sustento en una investigación con rigor científico en el tema de que se trate, y ha de estar apoyada no sólo en hechos o apreciaciones de carácter subjetivo de quien lo realice, sino en conceptos doctrinarios básicos que permitan un análisis profundo y objetivo del problema de que se trate, a la par que concluya con la definición de propuestas concretas al caso, y no en una simple opinión, que en razón de quien la externa, venga a constituir solamente una posición que se adopte ante el mismo. En suma, ha de brindar a quien va dirigido, los elementos objetivos necesarios para que pueda, por sí mismo, conocer una determinada problemática, sus dimensiones y repercusiones, de manera tal que le permitan adoptar una posición propia, coincidente o no con la del editor, como la formación de una conciencia crítica, lo que así colmaría los fines de coadyuvar al desarrollo de la

⁶ Así lo sostuvo la Sala Regional Guadalajara al resolver el expediente **SG-RAP-8/2017**.

⁷ Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente **SUP-RAP-024/2000**.

cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las **publicaciones** mencionadas, sino también determinó dotarlas de financiamiento público.

Todo lo anterior se confirma, con la exigencia que la ley impone de llevar a cabo una publicación **semestral**, que así permita la elaboración de un trabajo que en rigor pueda tener cierto grado de especialización y profundización en cuanto a su contenido, y que constituya un elemento para fortalecer el desarrollo de la cultura política en los ciudadanos.⁸

C. El número de ejemplares que debe editarse.

La obligación de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, tiene su justificante, como ya se razonó, en la obligación inmanente de los partidos políticos de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, lo cual sólo puede lograrse mediante la distribución de un **número aceptable de ejemplares** respecto de un mismo documento, con el ánimo de llevar al conocimiento general diversas posiciones doctrinales respecto de un problema de diversa índole, bien sea de orden político, jurídico, social, económico, etcétera.

D. El origen y destino de las publicaciones debe acreditarse documentalmente hasta el punto final de su entrega.

Existe la obligación para los partidos políticos, de acreditar documentalmente la edición y distribución de las tareas editoriales, por lo cual, deben llevar un control desde su recepción hasta que salen definitivamente de la organización administrativa partidista, es decir, desde el principio hasta el punto final que tuvieron sus **publicaciones**.

Lo anterior, tomando en cuenta que las tareas editoriales por su propia naturaleza, se dirigen primordialmente a la difusión de la cultura política en el país, con el objeto de beneficiar al mayor número de personas, ya sean militantes del propio partido político, afiliados, simpatizantes o ciudadanos en general.

Razón por la cual, si el instituto político no presentara evidencia de la **edición** de dichos materiales, así como su **entrega** en el comité estatal, municipales y/o algún otro órgano equivalente, donde hayan sido distribuidas las **publicaciones**, se le negará la acreditación que pretenda hacer respecto del cumplimiento de esas obligaciones.⁹

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Una vez que se ha precisado el marco jurídico que rige el presente asunto, esta autoridad electoral considera que el procedimiento que aquí se analiza debe declararse **fundado** por las consideraciones que se exponen a continuación.

1. Carga probatoria.

⁸ La Sala Superior, determinó los requisitos que deben cubrir las publicaciones con fines teóricas, en el criterio contenido en la Tesis CXXIII/2002, 12 de rubro: "PUBLICACIÓN DE CARÁCTER TEÓRICO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONTENER".

⁹ La Sala Superior, determinó la obligación que tiene por partidos políticos de acreditar documentalmente el origen y destino de las publicaciones correspondientes a tareas editoriales, en el criterio contenido en la Tesis CLXVIII/2002, de rubro: "TAREAS EDITORIALES. EL ORIGEN Y DESTINO DE LAS PUBLICACIONES DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE HASTA EL PUNTO FINAL DE SU ENTREGA".

En torno a la infracción atribuida al **PRI**, obran en autos las siguientes probanzas:

a) Oficio ITE-DPAyF-530-2019 y anexo, signado por la Titular de la DPPAyF, mediante el cual informa que según los datos obtenidos del Programa de Seguimiento a Sanciones y Remanentes del INE, la resolución identificada con la clave INE/CG55/2019, actualmente se encuentra firme.

Probanza que por tratarse de un documento público adquiere **valor probatorio pleno**, de conformidad con lo previsto por los artículos 369, párrafo segundo de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción I, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

- b) Oficio INE-UTVOPL/3375/2019, mediante el cual el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales del INE, remite el diverso INE/UTF/DA/10370/19, signado por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a través del cual envió un CD óptico certificado de la documentación que se localizó en los archivos del Sistema Integral de Fiscalización, el cual contiene la capeta electrónica: 2-C13-TL, y esta a su vez, las documentales consistentes en:
 - La resolución identificada con la clave INE/CG55/2019;
 - Oficios de errores y omisiones INE/UTF/DA/44773/18 e INE/UTF/DA/47089/18;
 - Oficios de respuesta PRI-TLAX/SFA/57/2018 y PRI-TLAX/SFA/61/2018;
 - Dictamen consolidado respecto de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos que presentó el Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio 2017, así como,
 - > Su correspondiente "Balanza catálogos 2017".

Probanzas que por tratarse de documentos públicos adquieren **valor probatorio pleno**, en términos de lo previsto por los artículos 369, párrafo segundo de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción I, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

- **c)** Al respecto, cabe precisar que el partido político denunciado, al comparecer al presente procedimiento, aportó como medios probatorios los siguientes:
 - "La instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado y se desprenda del expediente conformado a partir de esta denuncia."

Probanzas que conforme a lo dispuesto por los artículos 369, párrafo tercero de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción II, y 27 párrafo 3, del Reglamento Quejas y Denuncias, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren.

"La documental pública. Consistente en los acuerdos que contienen el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, CON ACREDITACIÓN LOCAL Y CON REGISTRO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017, mismas que obran en el presente expediente."

Probanza que por tratarse de un documento público adquiere **valor probatorio pleno**, en torno a la calidad con que comparece la representante del **PRI** en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto por los artículos 369, párrafo segundo de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción I, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

Asimismo, señaló en su escrito de contestación a la denuncia que:

- Ese instituto político no pudo realizar dichas publicaciones, toda vez, que de las prerrogativas económicas que le son otorgadas al mismo, no se cuenta con la capacidad económica para llevarlas a cabo;
- ➢ Ello en razón de que tal y como se puede apreciar del dictamen consolidado del ejercicio anual que ha aprobado el INE, el cual que obran en el presente expediente, el PRI ha sido sujeto de diversas multas que lo imposibilitan materialmente poder llevar a cabo la edición y distribución de las publicaciones señaladas, ya que el recurso público que se le ministra únicamente alcanza para pagar sueldos y salarios del personal, así como para pagar los servicios públicos básicos para la subsistencia del partido;
- Asimismo, señala que no se ha realizado ningún desvío de recursos y sólo se ha administrado en el sentido de poder realizar actividades muy básicas del Instituto político.

Confesión vía escritos que adquiere **valor probatorio pleno**, de conformidad con lo previsto por los artículos 369, párrafo tercero de la LIPEET, 22 párrafo 1, fracción I, 23 numeral 1, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

2. Hechos acreditados y presunciones.

De la valoración conjunta de las pruebas que obran en autos, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se genera convicción en este **CG**, sobre los hechos siguientes:

- a) La resolución identificada con la clave INE/CG55/2019, cuya vista dio origen al procedimiento sancionador que se resuelve, actualmente se encuentra firme.
- b) El CG del INE dio vista a este Instituto, con motivo de la omisión en que incurrió el PRI de demostrar la edición y distribución de por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, durante el ejercicio 2017.

Para ello, la autoridad electoral refirió en la resolución **INE/CG55/2019**, relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del **PRI**, correspondientes al ejercicio 2017, en lo que al

presente asunto atañe **Conclusión 2-C13-TL**, que derivado de la solicitud que en su oportunidad le realizó al **PRI**, consistente en la aclaración de los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: "De la observación número 21 se informa que al **no llevarse a cabo** el Programa Anual de trabajo, se procede a realizar los cambios respectivos a las pólizas generadas como pasivo en la contabilidad."

Ante la respuesta del sujeto obligado, y considerando que dicho instituto político no hizo llegar documentación o pruebas adicionales, el **CG** del **INE** determinó calificar el **incumplimiento** de la obligación aludida.

- c) Ahora bien, por cuanto hace al procedimiento ordinario sancionador que aquí se resuelve, es preciso indicar que el citado partido político, al producir contestación al emplazamiento que le fue formulado, se concretó a señalar que no pudo realizar dichas publicaciones, toda vez, no cuenta con la capacidad económica para llevarlas a cabo, puesto que ha sido sujetos de diversas multas que lo imposibilitan materialmente para dar cumplimiento en editar y distribuir una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.
- d) En suma, tomando en consideración las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que el PRI no dio cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 52, fracción X, de la LPPET; es decir, omitió editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.

3. Contestación a los argumentos propuestos.

Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente pronunciarse en torno a los argumentos propuestos por el **PRI**, en sus escritos de contestación a denuncia y alegatos, los cuales consisten en que:

- a) Ese instituto político no pudo realizar dichas publicaciones, toda vez, que de las prerrogativas económicas que le son otorgadas al mismo, no se cuenta con la capacidad económica para llevarlas a cabo;
- b) Ello en razón de que tal y como se puede apreciar del dictamen consolidado del ejercicio anual que ha aprobado el INE, el cual que obran en el presente expediente, el PRI ha sido sujeto de diversas multas que lo imposibilitan materialmente poder llevar a cabo la edición y distribución de las publicaciones señaladas, ya que el recurso público que se le ministra únicamente alcanza para pagar sueldos y salarios del personal, así como para pagar los servicios públicos básicos para la subsistencia del partido;

Al respecto, debe decirse que **no le asiste** la razón al denunciado, en virtud de que parte de una premisa incorrecta al estimar que por ser sujeto del pago de multas durante el ejercicio 2017, se encontraba en posibilidad de dejar de destinar una parte de la prerrogativa otorgada para el cumplimiento de sus **actividades específicas**, en la realización de **tareas editoriales**.

En efecto, el artículo 87, aparatado C, fracción I, de la LPPET, señala como **actividad específica** de los partidos políticos en su calidad de entidades de interés público, la realización de **tareas editoriales.**

Asimismo, el artículo 52, fracción X, LPPET, aplicable al presente caso, establece como obligación expresa de los partidos políticos el editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, con el objeto de que dichos institutos políticos cumplan con su finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática, así como para tener una cultura política mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las publicaciones mencionadas, sino también determinó dotarlas de financiamiento público.

De esta forma, resulta claro que con independencia de las multas a que el denunciado se haya hecho acreedor en el ejercicio 2017, el porcentaje para el cumplimiento de sus **actividades específicas** no debe ser afectado por tales descuentos, esto es así porque las multas se ejecutan con retención al **financiamiento público por concepto de actividades ordinarias**, aunado a que las obligaciones previstas en los artículos 52, fracción X, y 87, aparatado C, fracción I, de la LPPET, deben cumplirse de manera categórica, con independencia de la afectación que puede recibir el partido político por el cobro de multas o sanciones.

Sobre todo, considerando que, en todo caso, las sanciones impuestas son una afectación a su patrimonio derivado del cobro de multas impuestas al partido político como una consecuencia jurídica de un actuar ilícito, es decir, por el incumplimiento a su obligación de actuar con apego a la legalidad.

De ahí que, el actuar indebido de un partido político y su consecuente sanción no puede generar un detrimento en el cumplimiento de sus demás obligaciones, como lo es el destinar cierto porcentaje de su financiamiento público en actividades específicas como lo pretende.

Además, resulta importante señalar que la normativa establece que los partidos tienen la obligación de destinar los recursos correspondientes a actividades específicas en la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las **tareas editoriales,** y no prevé excepciones para cumplir o no con tales obligaciones.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación¹⁰ ha señalado, en esencia, que el hecho de que los partidos políticos sean sancionados por alguna autoridad electoral de ninguna forma los exime de la obligación constitucional impuesta. Pues considerar lo contrario, llevaría a no aplicar disposiciones constitucionales y legales bajo el argumento de que un partido político puede beneficiarse de conductas que la autoridad electoral determinó sancionar, pues no se estarían ejerciendo los recursos etiquetados en los fines que se encuentran plenamente identificados.

Bajo esa línea argumentativa, el propio Tribunal Electoral ha establecido a través de sus Salas Regionales¹¹ que, al recibir su financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, los partidos políticos están obligados, en primer lugar, a cumplir con sus obligaciones **constitucionales y legales**, y, posteriormente, **con el remanente**, el resto de

¹⁰ Ver **SUP-RAP-205/2016**.

¹¹ Ver **SX-RAP-47/2019**.

sus obligaciones, dentro de las cuales pueden estar contemplados los gastos erogados para el **sostenimiento del propio partido**.

Por tanto, resultan ineficaces las afirmaciones del denunciado, en el sentido de que **no haber contado con la capacidad material y económica** para cumplir con la obligación contenida en el artículo 52, fracción X, de la LPPET; es decir, editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, en virtud del imperativo legal a que se encuentra sujeto.

Bajo este orden de ideas, este órgano colegiado considera que, como se había adelantado, el procedimiento que se resuelve debe declararse **fundado**.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la infracción denunciada y la responsabilidad del **PRI**, se procede a determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 363 de la LIPEET, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra en atención al bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, el artículo 358 párrafo I de la LIPEET, establece las sanciones aplicables a los partidos políticos, consistentes en amonestación pública, multa, y en su caso, con la cancelación de su registro como partido político.

I. Calificación de la falta.

Así, esta autoridad electoral para calificar debidamente la falta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 1, fracción V del Reglamento de Quejas y Denuncias, debe atender los criterios siguientes:

- a. Tipo de infracción;
- **b.** Bien jurídico tutelado;
- c. Singularidad o pluralidad de la conducta;
- d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar;
- e. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
- f. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
- **g.** Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

En el caso concreto se presentan las siguientes particularidades.

a. Tipo de infracción.

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas	
que se trata de la vulneración de un	El incumplimiento a la obligación de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, en el ejercicio 2017.	de la LPPET.	

b. El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

La disposición aludida en el apartado anterior, tienden a hacer efectivo que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

En el caso, tal dispositivo se conculcó con el actuar del **PRI**, derivado del incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, por ello, se procede a imponer la sanción correspondiente.

c. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Al respecto, cabe señalar que al haberse acreditado la infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, por parte del **PRI**, consistente en el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, se estima que en el presente asunto se actualiza una sola infracción, es decir, solo se colma un supuesto jurídico.

d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- 1. **Modo.** En el caso a estudio, lo es el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, por parte del **PRI**.
- 2. Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene por acreditado el incumplimiento por parte del PRI, de la multicitada obligación durante el ejercicio 2017.
- **3.** Lugar. La falta atribuida al partido político fue cometida en el estado de Tlaxcala, dado que se trata de una norma aplicable a ese ámbito geográfico.

e. Las condiciones socioeconómicas del infractor.

Conforme al Acuerdo ITE-CG 01/2020, aprobado por este **CG** el quince de enero de dos mil veinte, se estableció que, entre otros, el **PRI** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias y específicas permanentes, la siguiente cantidad:

Periodo	Monto del financiamiento público mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de 2020			
Enero-Junio	\$283,140.61			
Julio-Diciembre	\$277,112.31			

Sin embargo, derivado de las diversas sanciones que le han sido impuestas, actualmente el **PRI** tiene un monto a saldar por la cantidad de **\$7´238,817.13** (Siete millones doscientos

treinta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 13/100 M.N.), lo que genera que se vea reducida su capacidad económica, según se desprende del siguiente tabulado:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Resolución INE	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de FEBRERO 2020	Montos por saldar	Total
2	PRI	ITE-CG86/2018	INE/CG518/2017	\$4,227,483.88	\$2,267,517.71	\$1,959,966.17	
		ITE-CG87/2018	INE/CG355/2018	\$310.32	\$0.00	\$310.32	
		ITE-CG07/2019	INE/CG1158/2018	\$136,999.90	\$0.00	\$136,999.90	\$7,238,817.13
		ITE-CG32/2019	INE/CG55/2019	\$3,107,586.28	\$0.00	\$3,107,586.28	
		ITE-CG04/2020	INE/CG464/2019	\$2,033,954.46	\$0.00	\$2,033,954.46	

f. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Por cuanto hace a la reincidencia en que pudiera haber incurrido el **PRI**, este organismo público electoral local considera que no se actualiza.

En efecto, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 363, de la LIPEET, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la señala Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son:

- 1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
- **2.** Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
- **3.** Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro: "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN"¹².

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado al PRI por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia del presente asunto.

g. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Al respecto, se estima que la omisión en que ha incurrido el **PRI**, causó un perjuicio al objetivo buscado por el legislador, consistente en que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

No obstante, del análisis realizado a las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el **PRI no** obtuvo algún lucro o beneficio derivado de la conducta infractora.

_

¹² Consultable en

II. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

- a) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra;
- **b)** Sanción a imponer;
- c) Impacto en las actividades del infractor;
- d) Condiciones externas y medios de ejecución.
- a) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta desplegada por el **PRI**, debe calificarse con una **gravedad leve**, ya que si bien con su omisión infringió los objetivos buscados por el legislador, consistente en que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática, lo cierto es que la conducta realizada por el denunciado **no afectó de manera grave** el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.

Asimismo, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias, de tal forma que sea necesario tener también en consideración tales elementos para que la individualización de la sanción sea adecuada.

En este sentido, para la graduación de la falta, se han tomado en cuenta las siguientes circunstancias:

- 1. Quedó acreditada la infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, por parte del PRI, consistente en el incumplimiento de la obligación de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.
- 2. El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.
- **3.** No existió un beneficio por parte del **PRI**, o lucro ilegalmente logrado, con motivo de la irregularidad observada.
- **4.** No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral o reincidencia por parte del **PRI**.
- **5.** No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.

6. No se afectó en forma sustancial el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.

b) Sanción a imponer.

El catálogo de sanciones susceptibles de imponer a los partidos políticos se encuentra previsto en el artículo 358, fracción I, de la LIPEET; del tenor siguiente:

"Artículo 358. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

- I. Respecto de los partidos políticos:
- a) Con amonestación pública.
- b) Con multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, según la gravedad de la falta, o el doble en caso de reincidencia.
- c) Independientemente de otras sanciones, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de precampaña y campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, sin embargo, la multa no podrá ser menor a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado. En caso de reincidencia, la sanción será del doble de lo anterior.
- d) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, o con la supresión total de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que determine la resolución correspondiente.
- e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, en violación de las disposiciones legales.
- f) En caso de conductas graves y reiteradas, a criterio del Instituto, que violen la Constitución, esta Ley, la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, y demás ordenamientos legales aplicables, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político."

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer al **PRI**; debe tenerse presente que la LIPEET confiere a la autoridad administrativa electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, partidos políticos), realice una falta similar.

De esta manera, analizados los elementos referidos en el presente considerando, esta autoridad electoral estima que de las sanciones relacionadas deberá imponerse la prevista en el artículo 358, fracción I, inciso a) de la LIPEET, consistente en **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, ya que resulta adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, puede inhibir al partido político denunciado, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia, además de encontrarse conforme al parámetro que esta autoridad estima aplicable en casos de conductas de **gravedad leve**.

c) Impacto en las actividades del sujeto infractor.

Al respecto y toda vez que en el presente asunto la sanción que se determina consiste en una amonestación pública, tal situación de forma alguna merma el patrimonio del **PRI**, por ende, en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines.

d) Condiciones externas y medios de ejecución.

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PRI**, consiste en una omisión consumada durante el ejercicio 2017, y dado que se trata de una omisión no aplica lo relativo a medios de ejecución.

En tal virtud, toda vez que la finalidad del legislador es garantizar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la normatividad electoral, lo procedente es tener por **acreditada** la conducta atribuida al partido político denunciado.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este Consejo General, es **competente** para emitir la presente resolución, en términos del considerando PRIMERO.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, por infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, en términos de lo expuesto en el Considerando SEGUNDO, de la presente Resolución.

TERCERO. Se **impone** al **Partido Revolucionario Institucional** una sanción consistente en **amonestación pública**, atendiendo las razones expuestas en el considerando TERCERO.

CUARTO. Notifíquese personalmente al **Partido Revolucionario Institucional**, por conducto de sus representantes ante este Consejo General.

QUINTO. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de internet del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, así como en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Ordinarios Sancionadores.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en Sesión Pública Ordinaria de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con fundamento en el artículo 72 fracciones I, II y VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Doy fe.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones Lic. Germán Mendoza Papalotzi Secretario del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones